

Competencias de la Agencia en relación con el Registro Civil. Informe In-2/2004

Competencias de la AEPD en relación con los registros civiles

I

Se plantea en el presente caso si la Agencia Española de Protección de Datos resulta competente para el ejercicio de las funciones de inspección en relación con el tratamiento de datos de carácter personal efectuado por los registros civiles, teniendo en cuenta que el artículo 2.3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que los tratamientos efectuados por los mencionados registros “se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica”.

Partiendo de esta premisa, los tratamientos efectuados por el Registro Civil se rigen por lo dispuesto en la Ley reguladora de dicho Registro, de 8 de junio de 1957 y su Reglamento, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Las autoridades de control podrán inspeccionar los ficheros a que hace referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos”.

De lo dispuesto en el mencionado precepto se desprende que, sin perjuicio de la aplicación de las normas sustantivas que pueden contenerse en la regulación legal o reglamentaria del Registro Civil, las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos, y en particular de la Inspección de Datos podrán recaer sobre los tratamientos efectuados por el Registro.

Es decir, lo dispuesto en el artículo 2.3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 implicará que los principios inspiradores del derecho fundamental a la protección de datos, consagrado como tal por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, deberán aplicarse en el caso del Registro Civil de acuerdo con lo establecido en su normativa específica y, en lo expresamente señalado, por la Ley Orgánica 15/1999.

Sin embargo, en lo que se refiere a las competencias de esta Agencia Española de Protección de Datos o a aquellas obligaciones que la Ley Orgánica imponga con carácter general a la totalidad de los ficheros o tratamiento, sin excluir de dichas normas a los previstos en el artículo 2.3, de forma que únicamente quedarán fuera de su aplicación los ficheros previstos en el artículo 2.2, deberá considerarse planamente a dichos ficheros lo establecido en la Ley Orgánica.

Así, a título de ejemplo, deberá procederse a la inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, toda vez que el artículo 39 de la Ley Orgánica impone esta obligación en relación con la totalidad de los ficheros de titularidad pública, de modo que no cabe efectuar exclusión alguna en relación con la misma.

Pues bien, como se ha indicado, el artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999 otorga a la Agencia Española de Protección de Datos la potestad de ejercer la función inspector en relación con “los ficheros a que hace referencia la presente Ley”, no limitando dicha función a los ficheros íntegramente sometidos a la misma, sino a todos los no excluidos expresamente de su aplicación, como sucedería en el supuesto planteado, independientemente de la aplicación, en el ejercicio de las potestades inspectoras y, en su caso, sancionadoras, de las normas sustantivas contenidas en la regulación específica de esos ficheros.

Podría argumentarse que el párrafo primero del artículo 41 del Reglamento del Registro Civil, modificado por el artículo 1 del Real Decreto 1917/1986, de 29 agosto, dispone que “Dentro del Ministerio de Justicia, compete a la Dirección General de los Registros y del Notariado la dirección e inspección de los servicios del Registro Civil”.

Sin embargo, dicha previsión en lo que a protección de datos se refiere debería considerarse derogada por el ya reiterado artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999, dado que la misma es posterior y superior en rango al Reglamento del Registro Civil, en la redacción que se ha reproducido.

En consecuencia, ha de considerarse que, sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre el Registro Civil en estos supuestos, la Agencia Española de Protección de Datos es plenamente competente para el ejercicio de las competencias relacionadas con los tratamientos que el mismo efectúa, tanto en lo referente a la función inspectora como en relación con la tramitación, en su caso, del correspondiente procedimiento de infracción de administraciones públicas.

II

Por otra parte, la tesis suscrita en el presente informe puede considerarse corroborada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de enero de 2002.

Mediante la citada Sentencia se estimó el recurso interpuesto por la Asociación Libre de Abogados de Madrid contra resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, recaída en el Expediente E/00069/1999, por la que se declaraba el archivo de actuaciones contra el Colegio de Abogados de Madrid, por la de un fichero de datos para el cobro de los "derechos de intervención profesional" (bastanteos).

La mencionada Resolución hacía referencia a la cesión, autorizada por las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, al Colegio de Abogados de Madrid, de los datos referidos a la representación procesal en los diferentes procesos tramitados ante los Juzgados y Tribunales.

Según se indicaba en la mencionada resolución:

En consecuencia, habiéndose residenciado reglamentariamente y en virtud de mandato legal en el Consejo General del Poder Judicial la competencia sobre la materia, atribuyéndose aquélla a la autoridad judicial y a sus órganos de gobierno, es por lo que tratándose de ficheros jurisdiccionales que contengan datos personales, toda información requerida por tercero deberá contar con el consentimiento del afectado o, en su caso, ser autorizado por el titular del órgano jurisdiccional, correspondiendo a éste velar por la defensa de los derechos reconocidos en el art. 18.4 de la Constitución y en la Ley Orgánica 5/1992.

En el presente caso ha quedado acreditado, conforme a lo expuesto en los Antecedentes de Hecho, que el Servicio de Comprobación del Colegio de Abogados de Madrid ha recabado datos que se introducen y almacenan en el fichero denominado ICAM, los cuales se obtienen del acceso a los Libros-Registro de los órganos judiciales y a los Poderes otorgados en cada procedimiento, tanto si constan en soporte papel como si lo están en soporte automatizado.

El citado acceso ha sido autorizado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial.

Por tanto, el pronunciamiento de la Agencia de Protección de Datos sobre la adecuación o no a la LORTAD del fichero denominado ICAM exige, inexcusablemente y con carácter previo, una decisión sobre la licitud del acceso autorizado por los propios órganos jurisdiccionales, ya que, de ser éste legítimo y conforme con la citada Ley Orgánica, el tratamiento posterior de los datos en aquel fichero no infringiría la normativa de protección de datos.

Sin embargo, de conformidad con las disposiciones citadas en los Fundamentos de Derecho anteriores, la decisión sobre la licitud y alcance de los accesos autorizados corresponde a la autoridad judicial y a sus órganos de gobierno, y, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa.”

La Sentencia de la Audiencia de 25 de enero de 2002 viene a estimar el recurso formulado contra dicha resolución, lo que implícitamente implica el reconocimiento de la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer sus competencias de inspección y, en su caso, incoación del correspondiente procedimiento de infracción en relación con los ficheros judiciales, pese a existir normas específicas que atribuirían la competencia a otro órgano, lo que no haría sino conformar la tesis mantenida hasta el presente momento.